

Retos para la Sostenibilidad de la ESS:
La interacción entre la Economía Popular, Movimientos Sociales y Políticas
Públicas -
Estudio de caso de la Alianza Global de Recicladores
Angelique J. W. M. van Zeeland
Fundação Luterana de Diaconía

Abstracto

Este trabajo analiza los retos para la sostenibilidad de Economía Social y Solidaria (ESS), se centra en la interacción entre la economía popular, los movimientos sociales y las políticas públicas. Un estudio de caso sobre la Alianza Global de Recicladores se centra en la acción colectiva y las políticas públicas en Brasil, Chile, Colombia, India y Sudáfrica. Explora los arreglos institucionales complejos que involucran grupos de la comunidad que comparten la gestión de residuos sólidos con los gobiernos locales. El artículo argumenta que la sostenibilidad de las organizaciones de ESS no es simplemente una cuestión técnica o económica, pero, es esencialmente de carácter político, en función de las políticas públicas comprometidas con un proceso de transformación social a todos los niveles, federal, estatal y municipal. El documento concluye que los cambios significativos en las políticas públicas requieren una acción colectiva. Las políticas públicas deben promover la expansión de la ESS a través de un cambio en la calidad de las iniciativas populares informales, así como fortalecer la SSE, a través de construir efectivamente la capacidad para satisfacer las demandas suscitadas por las políticas públicas en forma de nuevo.

Introducción: Retos para la Sostenibilidad de la ESS

La urbanización creciente en los países en desarrollo en los años 1960 y 1970 se tradujo en un crecimiento del sector informal urbano. En la década de 1980 muchas organizaciones económicas populares surgieron, especialmente en las grandes ciudades de América Latina. Con los altos niveles de desempleo en la década de 1990 la economía informal estaba creciendo pero la economía social y solidaria (ESS) también ganó una importancia mayor. En la década de 2000 algunos países, por ejemplo Brasil mostraron una disminución en el nivel de desempleo, pero el SSE sigue creciendo. Esto demuestra que la SSE está empezando a consolidarse como un sector social y económica pertinente y no sólo una fase residual o transitorio durante las recesiones del sistema económico formal. SSE es una respuesta a la pobreza y la desigualdad, y tiene el potencial de contribuir a un modelo de desarrollo alternativo, sostenible y de transformación. Sin embargo, la expansión de la ESS está lleno de contradicciones y desafíos que tienen que enfrentar.

Este documento se centra en tres aspectos sobre los retos para la sostenibilidad de la ESS, respectivamente, la interacción entre el SSE y la economía popular, el papel de la acción colectiva y las coaliciones entre grupos comunitarios, movimientos sociales y organizaciones no gubernamentales y no influir en las políticas públicas a través de procesos participativos en los espacios deliberativos, tales como foros y consejos, así como la importancia de la aplicación efectiva de las políticas públicas y los programas comprometidos con un proceso de transformación social a todos los niveles, internacional, federal, estatal y municipal para el fortalecimiento de la ESS.

Acercarse a la Economía Popular y Solidaria

Desde principios de la década de 1970 el concepto de economía informal aparece en los debates internacionales de desarrollo. El concepto comprende las experiencias de la gran proporción de las unidades económicas y los trabajadores que desarrollan actividades económicas fuera del entorno regulatorio formal. Según Martha Chen empleo informal comprende una mitad a tres cuartas partes del empleo no agrícola en los países en desarrollo, respectivamente, el 48 por ciento en África del Norte, el 51 por ciento en América Latina, el 65 por ciento en Asia y 72 por ciento en África al sur del Sahara. Uno de los principales desafíos es la cuestión de si y cómo la formalización de la economía informal. Teniendo en cuenta los diferentes significados dependiendo de los actores, para los políticos el interés principal es la licencia y los impuestos, los autónomos esperan recibir los beneficios, tales como la propiedad legal e incentivos, para el trabajador informal que significa, básicamente, la protección social (Chen 2012). Es importante tener en cuenta que la economía informal es un importante proveedor de empleo, así como de los bienes y servicios para los grupos de menores ingresos.

Milton Santos se refiere a dos circuitos, respectivamente, el circuito superior y el circuito inferior. Cada circuito se define a través del conjunto de actividades que se desarrollan en un contexto determinado y por el sector de la población que participa a través de la actividad y el consumo. La principal diferencia entre las actividades desarrolladas en los dos circuitos se basa en las diferencias en la tecnología y la organización. El circuito superior utiliza la tecnología intensiva en capital, mientras que el circuito inferior utiliza la tecnología de mano de obra intensiva que a menudo se crea o se adapta al contexto local. La racionalidad económica del circuito inferior y sus mecanismos se basan en el consumo, en lugar de la producción, que respondan a las necesidades actuales de la población, en términos de consumo y la necesidad de empleo. Se absorbe, de forma continua, el plustrabajo. Considerando que el beneficio es el motor de la actividad comercial, en los niveles más bajos del circuito inferior de la mayor preocupación es, por encima de todo, la supervivencia. En relación a la población, que básicamente significa que las clases media y alta participación

en el circuito superior y las personas que viven en la pobreza en el circuito inferior. Sin embargo los dos circuitos tienen el mismo origen, el mismo conjunto de causas y están relacionados entre sí. Aunque no existe una relación interdependiente, esto no significa que es una relación de igualdad, el circuito inferior es mucho más dependiente del circuito superior, que la otra manera alrededor (Santos, 2004).

La mayoría de las organizaciones, empresas, unidades económicas y que trabaja por cuenta propia componen la economía popular operan en la economía informal. Sin embargo, el concepto de economía popular no es el mismo del concepto de economía informal. Además del hecho de que la economía popular también comprende las organizaciones formales, otro aspecto importante es que los principales actores pertenecen a las clases de menores ingresos. El concepto de economía popular abarca una amplia gama de actividades, como las actividades económicas desarrolladas individualmente o en un ámbito familiar, sino que también incluye los grupos informales, asociaciones y cooperativas. La economía popular tiene su propia racionalidad económica, su propósito principal no es el lucro, sino que es para proporcionar la subsistencia y reproducción de la vida de los miembros y sus familias (Kraychete y Santana 2012). El concepto de economía popular tiene similitudes con el concepto del circuito inferior de la economía, ambos incluyen una amplia gama de actividades, un gran número de personas de las clases de menores ingresos, así como la racionalidad económica específica que, sobre todo, tiene como objetivo proporcionar subsistencia.

Desde la década de 1990 ha habido un creciente interés y creciente literatura sobre la economía social y solidaria. SSE surge como una respuesta a la superación de la pobreza y la desigualdad. Según Luis Razeto economía solidaria es una formulación teórica que capta la realidad de un conjunto importante de experiencias económicas - en el campo de la producción, comercio, servicios y financiación - que comparten elementos constitutivos, como la solidaridad, la cooperación y la gestión democrática, la definición de una racionalidad específica, diferente de otras racionalidades económicas (Razeto 1993). Estas iniciativas están diseñadas para hacer frente a una serie de necesidades específicas, tales como la seguridad alimentaria, la vivienda, la educación, la salud y la generación de ingresos. Recuperan el papel central del trabajo, en lugar de capital, y se centran en la mejora de las condiciones de vida de los miembros y sus familias (Razeto 1997). Paul Singer afirma que la economía solidaria es un proceso continuo de creación por los trabajadores en su lucha contra el capitalismo, para cambiar las relaciones económicas injustas y explotadoras. La solidaridad es el aspecto más importante de esta praxis económica, y se expresa, entre otros, en la propiedad colectiva de los medios de producción por las personas que los utilizan para producir, la gestión democrática y la distribución de los ingresos netos y las sobras entre los miembros (Singer 2000). José Luis Coraggio toma como punto de partida que

la economía social no se ha convertido en una realidad, sino que debe ser visto como una "fase de transición de las prácticas económicas de las acciones de transformación". El objetivo principal es la creación de un sistema socioeconómico organizado por el principio de "reproducción ampliada de la vida" forma generada dentro de la economía mixta actualmente existente (Coraggio 2007:37). El aspecto orientado a la comunidad de la SSE, se destaca por Amin. Las iniciativas de economía solidaria movilizar recursos y capacidades locales y se basan en la movilización popular para satisfacer las necesidades locales y sociales, así como el desarrollo humano (Amin 2009).

Economía Social y Solidaria tiene como objetivo satisfacer las necesidades humanas y se basa en valores como la toma de decisiones democrática y participativa y la cohesión social. Una de las principales diferencias de la ESS se asocia con la organización colectiva, la cooperación y la solidaridad.

Desde una perspectiva de desarrollo y la justicia, SSE tiene el potencial de desarrollo integrado, además de promover el empleo local y el desarrollo económico, también la protección social y del medio ambiente, la diversidad cultural y el empoderamiento. En este sentido, se acerca al concepto de desarrollo humano y el enfoque de las capacidades, lo que hace importantes contribuciones al concepto de pobreza, el desarrollo y la justicia social. Según Amartya Sen, "la pobreza debe ser vista como la privación de capacidades básicas y no meramente como escasez de ingresos, que es el criterio estándar de la identificación de la pobreza" (Sen, 2000: 87). El enfoque de las capacidades se centra en la vida humana y propone un cambio de enfoque de forma que la concentración de los medios de subsistencia hacia las "oportunidades reales de la vida", las oportunidades para alcanzar nuestros objetivos, es decir, aquellas cosas que valoramos (Sen, 2011: 233). En este sentido es fundamental el desarrollo de un proceso de empoderamiento. Este punto de vista se puede ampliar con la perspectiva de la acción colectiva, a través de grupos comunitarios, movimientos sociales, foros y consejos para lograr el desarrollo. Estos espacios permiten a los procesos deliberativos.

"Fomentar la expansión de los medios de acción colectiva es fundamental para la expansión de la libertad" (Evans, 2002: 56). El fortalecimiento de la SSE depende de la posibilidad de generar procesos participativos en los espacios deliberativos como foros para el diálogo entre los movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil y el gobierno para contribuir de manera eficaz a las políticas públicas que mejoran la autonomía, promueve los derechos y están comprometidos con un proceso de desarrollo social transformación.

Los diferentes conceptos tienen varios aspectos que convergen, la economía popular, así como la economía social y solidaria contienen un gran número de empresas informales. Las estimaciones para el tamaño de la economía popular

se basan regularmente en los datos relativos a la economía informal. Los datos del sistema de información sobre la economía solidaria de Brasil muestran que al menos un tercio de todas las empresas de economía solidaria son informales (Brasil SENAES 2007). En las zonas urbanas la informalidad alcanza dos tercios de las organizaciones (Brasil SENAES 2010). Sin embargo, una comparación de la escala de la economía popular, sobre la base de los datos disponibles en la economía informal, y los datos de la escala de la economía solidaria, basada en los datos disponibles en el sistema de información sobre la economía solidaria en Brasil, muestran que el tamaño de la economía solidaria corresponde a menos del 1% de la economía popular. Así que esto pone un gran desafío para SSE, la forma de ampliar SSE y cuáles son las condiciones y los contextos para establecer un cambio significativo en la calidad en las organizaciones de la economía informal y popular como para converger a SSE.

Una investigación desarrollada en Chile entre diez asociaciones de microempresarios informales en los barrios pobres de Santiago muestra el potencial de las iniciativas de economía popular informal para unirse y actuar colectivamente, estableciendo diferentes formas de cooperación y solidaridad, y se acerca SSE. La mayoría de las asociaciones se basan en un criterio geográfico, otros en el sector de actividad. En promedio, tienen setenta y cinco miembros, la mayoría de ellos constituyen las empresas familiares, y actúan en el ámbito del hogar. Según Anemaria Marín, directora de la Asociación de Microempresarios de Puente Alto: "AMEPA no sólo representa a las necesidades económicas de los microempresarios, pero todas sus necesidades humanas. La microempresa es una parte integral de su vida cotidiana. El ritmo de trabajo y el ritmo de la vida cotidiana están conectados" (Zeeland 1995). Las asociaciones promueven diferentes formas de cooperación, respectivamente económica, la cooperación social y política. En cuanto a la cooperación económica de la mayoría de las asociaciones de desarrollo de actividades tales como la comercialización colectiva y el acceso al crédito. Algunas asociaciones también compran conjuntamente materias primas e insumos, abriendo posibilidades para la cooperación vertical. La cooperación social tiene por objeto establecer alguna forma de protección social para sus miembros. Varias asociaciones han establecido un fondo de solidaridad para ayudar a los asociados en tiempos de dificultades, por ejemplo, en caso de enfermedad o accidente. Otros han establecido acuerdos de asistencia médica con las corporaciones médicas o la municipalidad local.

La cooperación política con los municipios tienen por objeto el acceso a la educación, la salud y la vivienda, así como la legalización, régimen fiscal y comercialización, para la apertura de mercados, ferias y exposiciones y obtener prioridad en los mercados locales e institucionales instancia. La mayoría de las asociaciones se fundaron con el apoyo de una ONG, y reciben capacitación, consultoría organizacional y la asistencia financiera, a través de micro-crédito.

Las redes establecidas por las iniciativas de economía popular informal y su interacción con la comunidad y las organizaciones no gubernamentales, los resultados en el poder político, lo que refuerza las negociaciones con actores gubernamentales, para reclamar sus derechos económicos, sociales y culturales, y de influir en las políticas públicas (Zeeland 2000). La experiencia demuestra que las empresas económicas populares informales pueden desarrollar relaciones basadas en la cooperación y la solidaridad y, por tanto acercarse a SSE. Sin embargo una de las limitaciones es que la mayoría de las asociaciones son apoyados por organizaciones no gubernamentales, por lo que el alcance se limita a su radio de acción. Que conduce a la cuestión de cómo ampliar esta experiencia?

Ejemplos del Brasil demuestran que con el apoyo del público podría ser posible acercarse a una parte significativa de la economía popular informal para SSE. El primer ejemplo es el del estado de Bahía con respecto a un programa público para la inclusión social y productiva y la creación de capacidades para la economía popular. Según Gabriel Kraychete y André Santana 60% de la población económicamente activa de la región metropolitana de Salvador puede ser considerado como parte de la economía populares informales, sólo el 1% de las organizaciones de la economía populares pertenecen a la SSE.

Este enorme y más o menos contingente permanente expresa una matriz de la desigualdad y la pobreza. En 2011, el Gobierno del Estado de Bahía inició el Programa Vida Melhor, Programa Vida Mejor, con el fin de incluir social y productiva, a través del trabajo decente, las personas que viven en la pobreza y con un potencial de trabajo productivo. El programa pretende llegar a 120 mil familias en las áreas urbanas y 280 mil familias en el contexto rural. La actividad principal se centra en la asistencia técnica para las iniciativas de economía popular, la comprensión del desarrollo de estudios de viabilidad con una metodología apropiada de acuerdo a las características y peculiar lógica económica de estas empresas. A partir de entonces la necesidad de financiación y el microcrédito puede ser identificado o donación en caso de extrema vulnerabilidad. Fuera de la información que el empresario puede decidir si desea o no formalizar y tener acceso a la protección social. También es posible identificar y estimular las acciones colectivas, y por lo tanto acercarse a la ESS. Kraychete y Santana llegan a la conclusión de que es "insuficiente para pensar en la sostenibilidad de cada empresa de economía popular en forma aislada". Según ellos, la sostenibilidad de las iniciativas de la economía popular y solidaria "supone un proceso de desarrollo que promueve, junto con esta economía, otros derechos fundamentales" (Kraychete y Santana 2012: 61). El programa público tiene un alcance mucho más allá de las ONG, y la posibilidad de llegar a un número importante de iniciativas de economía popular. Sin embargo, el programa se encuentra en la fase inicial, por lo que necesitará tiempo para demostrar que es posible apoyar la sostenibilidad de las iniciativas de la economía popular y ofrecer trabajo decente a los

participantes, es decir, para promover las oportunidades de obtener un trabajo decente y productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana.

El segundo ejemplo se basa en el apoyo del gobierno federal para los programas para incluir a los recicladores informales de manejo de residuos sólidos. Esto se discutirá más adelante, después de reflexiones en torno a la interacción entre los movimientos sociales y las políticas públicas.

La interacción entre los movimientos sociales y políticas públicas: Estudio de caso de la Alianza Global de Recicladores

Como se señala en la introducción y se ilustra con el ejemplo anterior, la sostenibilidad de la ESS no es simplemente una cuestión técnica o económica, sino que es esencialmente de carácter político, en función de las políticas públicas comprometidas con un proceso de transformación social. Sin embargo, para lograr cambios significativos en las políticas públicas se requiere una acción colectiva, a través de alianzas entre grupos comunitarios, movimientos sociales, redes de ONGs, foros y consejos. A continuación vamos a analizar el proceso de fortalecimiento de los movimientos sociales nacionales y regionales de los recolectores de materiales reciclables, lo que resulta en la fundación de la Alianza Global de Recicladores y su influencia en las políticas públicas.

Para contextualizar algunos datos relativos serán presentados el sector del reciclaje y de las organizaciones de recicladores en Brasil. Reciclaje genera un valor de casi 2 dólares EE.UU. millones de dólares y evita 10 millones de toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero. El reciclaje de todos los materiales valdría 0,3% del PIB. Más de 500.000 personas están empleadas en la gestión y reciclaje de residuos, sobre todo como recicladores individuales en empleos informales, en condiciones de trabajo precarias y con ingresos muy bajos e inestables. Aproximadamente 60.000 recolectores de materiales reciclables están organizados en asociaciones y cooperativas, sus ingresos son más de dos veces superior a la de los recicladores individuales (PNUMA 2011). Hay por lo menos 1.100 organizaciones de recolectores de materiales reciclables en Brasil, sin embargo, alrededor del 60% están operando a los niveles más bajos de eficiencia. El ingreso promedio de los colectores es de menos de un salario mínimo, alcanzando entre R \$ 420,00 y R \$ 520,00, aproximadamente EE.UU. \$ 210,00 EE.UU. y \$ 260.005. Los niveles de educación de los colectores están entre el quinto y octavo grado de educación primaria (IPEA 2012). Los datos muestran que sólo un poco más de 10% de los recicladores participar en organizaciones colectivas, y forma parte de la ESS. Aunque esto representa una pequeña parte, se trata de una proporción más alta en relación con otros sectores urbanos. Al mismo tiempo, el 90% de los recolectores de residuos pertenecen a la economía popular informal, que pone un enorme desafío de los movimientos sociales y en las

políticas públicas para incluirlos en las organizaciones de economía solidaria.

Las primeras organizaciones colectivas de los recicladores fueron creados durante la segunda mitad de la década de 1980 y durante la década de 1990, con el apoyo de las ONG, especialmente en las grandes capitales como Sao Paulo, Belo Horizonte y Porto Alegre. El primer Encuentro Nacional de Recolectores de Materiales Reciclables fue promovido en 1999. Dos años después, en 2001 se fundó el Movimiento Nacional de Recolectores de Materiales Reciclables, respectivamente Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR). Más de 1.600 coleccionistas participaron en el congreso nacional de recicladores. Además de la fundación de la MNCR, el congreso dio lugar a la Carta de Brasilia, que presenta una propuesta para el reconocimiento y la regulación de la profesión de recolector de material reciclable. Un año después, en 2002 la profesión fue reconocido oficialmente por el gobierno federal. Este fue uno de los primeros resultados de la acción colectiva de los recolectores de residuos y demostró la posibilidad de una influencia efectiva en las políticas públicas.

El Primer Congreso Latinoamericano de coleccionistas tuvo lugar en Caxias do Sul en Brasil en 2003. Alrededor de 800 coleccionistas de Argentina, Brasil y Uruguay participaron. La Carta de Caxias propone el intercambio entre las organizaciones de recicladores de América Latina. También fortalece los reclamos hacia los gobiernos para garantizar la recogida selectiva principalmente en asociación con las organizaciones de los colectores, así como el acceso a los programas sociales, como por ejemplo, la alfabetización y las políticas públicas de fomento de la formación y creación de capacidad. El II Congreso Latinoamericano de coleccionistas tuvo lugar en São Leopoldo, Brasil, en 2005, antes de la V Foro Social Mundial, con 1.050 participantes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Uruguay. La declaración final de São Leopoldo refuerza las declaraciones de 2003 e incluye nuevas demandas, las políticas públicas de vivienda para los recolectores de residuos y una ley sobre el destino de los materiales reciclables de las instituciones públicas a las asociaciones y cooperativas de recolectores de materiales reciclables. En 2006 se firmó un decreto en Brasil asistiendo a esta demanda (Decreto n.º 5940/2006). En 2007 se aprobó una ley brasileña que las organizaciones exentas de recolectores de materiales reciclables de la licitación para llevar a cabo las actividades de recogida selectiva (Ley n.º 11.445/2007).

La Primera Conferencia Mundial y la Tercera Conferencia Latinoamericana de Recicladores se llevaron a cabo en Bogotá, Colombia, en 2008, con 700 participantes de 34 países de África, Asia, Europa y América Latina. Además de 15 países de América Latina, hubo participantes, entre otros, de Egipto, India, Indonesia, Kenya, Nepal, Filipinas, Turquía y Sudáfrica. El resultado fue la Declaración Global de la Primera Conferencia Mundial de Recicladores, la Declaración de la Tercera Conferencia Regional de Recicladores de América

Latina y la fundación de la Alianza Global de Recicladores. La declaración afirma el compromiso de trabajar por la inclusión social y económica de los recicladores, fortalecer sus organizaciones para avanzar en la cadena de valor y rechazar la incineración (WIEGO 2008). Después de la conferencia varios movimientos nacionales de recicladores se han creado, por ejemplo, en Kenia y en África del Sur.

Las experiencias en diferentes países y continentes muestran la importancia de los procesos participativos y la creación de espacios de diálogo entre los interlocutores sociales movimientos, organizaciones de la sociedad civil y el gobierno para contribuir a las políticas públicas para fortalecer y ampliar la SSE.

En la última década se han producido "cambios institucionales innovadores", como las leyes que reconocen la originalidad de las iniciativas de economía solidaria (Laville 2009: 240). En cuanto a los colectores de materiales reciclables, esto ha dado lugar a nuevas leyes y decretos, así como los arreglos institucionales innovadores que involucran grupos de la comunidad con la inclusión de los recicladores informales en los sistemas de gestión de residuos sólidos. Siguiendo algunas de ellas se discutirá.

En 1998, el Foro Nacional de Residuos y Ciudadanía fue creada en Brasil, con el apoyo de UNICEF, también se han creado foros estatales y municipales. Los foros están compuestos por organizaciones de la sociedad civil, como las ONG y las organizaciones de recicladores, las entidades gubernamentales y empresas privadas. El objetivo principal es erradicar el trabajo infantil en basurales a cielo abierto, la erradicación de basurales a cielo abierto y la promoción de sistemas de gestión integral de residuos sólidos con la inclusión de los recicladores (Dias 2007). En 2003 se creó el Comité Interministerial de Inclusión Social y Económica de Recolectores de Materiales Reciclables (Ciisc)

Es el principal foro de diálogo entre el MNCR y el gobierno brasileño, en 22 entidades federales, estatales totales participar, principalmente ministerios, instituciones financieras y empresas públicas. Su objetivo es crear políticas públicas y programas de apoyo para mejorar las condiciones socio-económicas de los recicladores y para aumentar su autonomía. El decreto mencionado de 2006 y la ley de 2007 se pueden mencionar como principales resultados. Otros dos resultados importantes son el Programa Pro-Collector, entre las entidades federales destinados a la inclusión social y económica de los colectores (Decreto n.º 7405/2010) y la Política Nacional de Residuos Sólidos (PNR) (Ley n.º 12305/2010). Los PNRS se estableció después de un proceso participativo de diálogo social entre el gobierno, las empresas de reciclaje, las organizaciones de la sociedad civil, las universidades y el MNCR. En esta política, las asociaciones y cooperativas de recolectores se les conoce como los principales interesados directos en el proceso de reciclaje, sobre todo en la

recogida selectiva de residuos sólidos urbanos. En los últimos años las cooperativas de recolectores han establecido contratos y acuerdos con los municipios para llevar a cabo parte de la gestión de residuos sólidos. El Programa Pro-Collector apoya la capacitación, la creación de capacidad, asistencia técnica, la investigación, la adquisición de equipos y de las reformas en la infraestructura, además de la promoción de la comercialización de redes y cadenas productivas integradas por cooperativas. Desde 2010 hasta 2012 el proyecto nacional Cataforte, con el apoyo de la Secretaría Nacional de Economía Solidaria (SENAES) destinada a la formación y capacitación de los recolectores de materiales reciclables y el fortalecimiento de sus organizaciones y sus redes asistieron más de 10.600 coleccionistas, en 19 estados de Brasil. Uno de los principales resultados fue la capacitación de los recolectores informales de residuos y su participación en las asociaciones y cooperativas. Antes de que el proyecto de la COOTRACAR cooperativo, en Gravataí, en Rio Grande do Sul, cuentan con 40 colectores, en los proyectos de 200 recolectores de residuos se capacitó en 2012 a unos 100 coleccionistas eran miembros de COOTRACAR. Esto significa que 60 recicladores informales se han integrado a la economía solidaria iniciativa, y 100 están en proceso de integración de la cooperativa (Zeeland 2013). La integración efectiva depende de la aplicación de las PNRS por el municipio local, para contratar los servicios de COOTRACAR para la selección colectiva.

En Colombia, en 1990, se formó la Asociación de Recicladores de Bogotá (ARB), entre las cuatro cooperativas, con el apoyo de una ONG. El ARB es una asociación de cooperativas, la tarea principal es organizar los recicladores informales en cooperativas y fomentar su participación en la ARB (Samson 2009). El diálogo que se establece entre la ARB y el gobierno municipal de Bogotá, se tradujo en el Plan Maestro de Gestión Integral de Residuos (PMIRS) en 2004. Los PMIRS establece nuevas modalidades de prestación de servicios con la inclusión de los recicladores informales en la gestión de residuos sólidos urbanos (Turcotte y Gómez 2012). Los retos que plantea la aplicación de las PMIRS para las organizaciones de recicladores se discutirán a continuación.

En la India, en la ciudad de Pune, los recolectores de residuos por cuenta propia informales se organizaron en la unión KKPKP en 1993. La cooperativa de recolectores de residuos sólidos encargados de la recogida de residuos (SWaCH) fue fundada en 2007. La cooperativa presta servicios al municipio en materia de gestión de residuos sólidos. Intervenciones de KKPKP y negociación resultó en el reconocimiento por parte del municipio. Un marco legal permitió a la asociación. En 2000 se establecieron las normas municipales de desechos sólidos, en cuanto a la organización de la recogida puerta a puerta de los residuos y la separación de residuos. En 2002, la Resolución del Gobierno de Maharashtra, del Departamento de Abastecimiento de Agua y Saneamiento se refiere a la recogida puerta a puerta de los residuos

a las cooperativas y las organizaciones de recicladores. En 2006, la Resolución del Gobierno de Maharashtra, del Departamento de Desarrollo Urbano, establece 2007 para la aplicación del domicilio del 100% a la recogida puerta con preferencia por las cooperativas de recolectores de residuos, especialmente en cuanto a las mujeres, y define una cuota de usuario para la recogida puerta a puerta (Chikarmane 2012).

Las experiencias de la Alianza Global de Recicladores de Brasil, Colombia y la India muestran la importancia de las alianzas entre grupos comunitarios, movimientos sociales y organizaciones no gubernamentales para influir en las políticas públicas y fortalecer la SSE. Los procesos de participación han resultado en acuerdos institucionales innovadores con la inclusión de los recicladores informales. Sin embargo, con nuevos arreglos institucionales vienen nuevos retos.

Retos para la Sostenibilidad de la ESS: Acción Colectiva y Políticas Públicas
La participación es una característica destacada de la SSE, expresada en los patrones sociales, económicos y productivos y formas de organización de las actividades empresariales. Pero también es fundamental para el proceso de toma de decisiones sobre políticas públicas, basadas en la idea de la inclusión de los más afectados por las intervenciones y de las políticas respectivas y de desarrollo. Sin embargo, los procesos participativos no implican necesariamente y beneficiar a todos los grupos de una comunidad, de acuerdo con Bina Agarwal, secciones importantes pueden ser excluidos en las instituciones aparentemente participativos, por ejemplo las mujeres, lo que resulta en "exclusiones participativos" (Agarwal 2001: 1623). Esto subraya la importancia del análisis de género, que evalúa la participación no sólo en términos de ciudadanía y empoderamiento, sino también por sus posibles efectos sobre la equidad y la eficiencia, teniendo en cuenta las desigualdades socioeconómicas preexistentes. Las organizaciones gremiales de los recicladores cuentan con un alto porcentaje de mujeres. Un investigador entre organismos colectivos en el sur de Brasil demuestra que alrededor del 80% de los miembros son mujeres (UFRGS 2010). Los datos de 26 organizaciones de coleccionistas, por un total de 1.225 miembros, en el estado de Rio Grande do Sul, afirman que las mujeres participan de manera efectiva en la gestión de las organizaciones colectivas, casi el 75% de las juntas directivas están compuestas por mujeres (Zeeland 2013). Sin embargo, cuando se trata de la participación en foros y consejos, especialmente a nivel nacional, hay un predominio de los hombres. Esto demuestra la importancia de las políticas y prácticas para superar las divisiones en las relaciones de poder relacionadas con el género.

A partir del 1990 varios estudios se centran en cómo surgen los procesos de participación y lo que los hace funcionar, especialmente en relación con la acción colectiva en el contexto de la gestión de los recursos naturales. Elinor

Ostrom hace hincapié en la diversidad de los arreglos institucionales para el gobierno de los recursos comunes y bienes públicos. Entre los factores estructurales que afectan a la probabilidad de una mayor cooperación que pone de relieve el papel central de la confianza para hacer frente a los dilemas sociales y la importancia de las "reglas institucionales ajustados a una situación social-ecológico específico" (Ostrom 2010: 642). Otro aspecto importante con respecto a la capacidad de los grupos de la comunidad para desarrollar un sistema eficaz de gobernar los recursos comunes es el "reconocimiento del derecho de asociación por un gobierno nacional o local" (Ostrom 2005: 268).

La importancia del reconocimiento del derecho de asociación se ilustra con los ejemplos de los arreglos institucionales que afectan a grupos de la comunidad que comparten la gestión de los recursos naturales con los gobiernos locales, en materia de gestión de residuos sólidos.

En general tres elementos clave son considerados en los sistemas integrados de gestión de residuos sostenible, respectivamente, de recogida de residuos con respecto a mejorar la salud pública, la eliminación de residuos para disminuir los impactos ambientales adversos y la prevención de residuos, la reutilización, el reciclado y la recuperación de recursos (ONU-Hábitat 2010: 87). La Alianza Global de Recicladores y los movimientos nacionales de abogar por la inclusión social y económica de los recicladores. Se reconoce que los actores informales y la comunidad juegan un papel importante en los sistemas de gestión de residuos. Se estima que los sistemas de residuos urbanos en la mayoría de los países de bajos y medianos ingresos, proporciona sustento a aproximadamente 0,5 por ciento de la población urbana (ONU-Hábitat 2010). El reto de ampliar SSE e incluir los recicladores informales en iniciativas de economía solidaria depende de la interacción entre la acción colectiva y las políticas públicas, a nivel federal, estatal y municipal.

En 2009, el reciclaje Ditamating Ikageng y el Grupo de Gestión de Residuos fue fundada en Metsimaholo en Sudáfrica, con cuarenta y nueve miembros. Esta fue una fusión de dos grupos de recolectores de residuos en el vertedero Sasolburg, Ikageng compuestas vilmente por las mujeres y hombres mayores y Ditamating compuesta por hombres jóvenes. La cooperativa se divide en dos grupos, en relación con las actividades de recolección de materiales y de la clasificación de los materiales. Después de la unión de los dos grupos en una organización colectiva, los ingresos de los miembros se ha incrementado. Sin embargo, los principales problemas sigue el reconocimiento y la participación oficial en el sistema de gestión de residuos urbanos a través de un contrato formal de reciclar los materiales en el vertedero (Samson 2009). El ejemplo de Sudáfrica muestra la importancia de la acción colectiva, sino que refuerza la importancia del reconocimiento y el compromiso del gobierno municipal para la sostenibilidad del SSE.

En Pune, en la India, el gobierno municipal reconoció la importancia de la organización colectiva de los recolectores de residuos y formalizar un memorando de entendimiento con el SWaCH cooperativa sobre recogida puerta a puerta de los residuos en 2008. SWaCH cuenta con 100 miembros, las mujeres constituyen el 78 por ciento de la membresía. Las principales actividades son la puerta todos los días de recogida de residuos puerta a los hogares, oficinas y comercios, así como la clasificación de los materiales y la comercialización de ellos. Los miembros tienen ingresos más estables que otros recicladores en India. Regularmente las tres partes interesadas, respectivamente, de la cooperativa, el municipio y los grupos cívicos de barrio, se reúnen para evaluar la prestación de servicios, así como para reafirmar los objetivos comunes. El servicio de recogida de residuos es remunerado por una subvención municipal, así como por un canon de utilización de servicios. Sin embargo, existe cierta resistencia contra la cuota de usuario del servicio, lo que significa una amenaza para el sistema. Otra amenaza es la incineración de los residuos, lo que disminuye la recuperación de materiales reciclables y excluye los colectores (Chikarmane 2012).

El Plan Maestro de Gestión Integral de Residuos (PMIRS) estableció nuevas modalidades de prestación de servicios con la inclusión de los recicladores informales en la gestión de los residuos sólidos en Bogotá, Colombia. Los PMIRS fue planeado en 2004 y la primera fase se ejecutó entre 2006 y 2008. El sistema formal de gestión de residuos incluye los recicladores, los miembros de las cooperativas. Un desafío principal es cómo incluir los coleccionistas más informales. Los sistemas formales e informales de gestión de residuos siguen coexistir. Como Turcotte y Gómez (2012) señalan que hay una diferencia importante entre los recolectores organizados en cooperativas y los recicladores informales. Los recolectores organizados tienen acceso a la seguridad social, mejores condiciones de trabajo y los ingresos más estables.

Pero incluso para los recicladores informales individuales los PMIRS ha dado lugar a algunos resultados positivos, hay un reconocimiento cada vez mayor de sus actividades. Las cooperativas dan cuenta de la comercialización de los materiales reciclables y tratar de avanzar en la cadena de producción. Sin embargo, "que compiten en desventaja frente a otros actores del sector privado" (Turcotte y Gómez 2012: 30). El estudio de caso muestra la importancia de la capacitación y la asistencia a las cooperativas para adquirir habilidades técnicas, así como el acceso al capital. Por lo tanto refuerzan que el reconocimiento y un marco legal son fundamentales para incluir recicladores informales en la gestión de residuos sólidos urbanos, pero esto tiene que ir acompañado de las inversiones públicas en la formación y la adquisición de equipos y la infraestructura de las cooperativas.

En Brasil, la inclusión de los recicladores en los sistemas de gestión de residuos sólidos se ha avanzado desde la década de 1990. Belo Horizonte fue

una de las primeras ciudades en adoptar un sistema de gestión integral de residuos sólidos con la inclusión social y económica de los recolectores de materiales reciclables en 1993. La primera asociación de recolectores de residuos, ASMARE se formó en 1990. Las asociaciones y cooperativas de recolectores de residuos son apoyados por el gobierno municipal a través del Departamento de Limpieza Pública, la Secretaría de Asistencia Social ya través del presupuesto participativo sistema. Aunque hay muchos desafíos, este enfoque integrado de apoyo a los recolectores de residuos, garantiza su inclusión económica y social, y garantiza la sostenibilidad de las organizaciones de la ESS. El caso de COOTRACAR en Gravataí, también demuestra la importancia del reconocimiento público, así como el apoyo público a la creación de capacidad y la infraestructura. En 2009, la cooperativa firmó un contrato con el municipio para la recogida selectiva. Este contrato abre la posibilidad de incluir una gran parte de los recolectores informales de residuos. Más de 200 colectores fueron capacitados, durante 2012, la cooperativa contaba con 100 miembros. Sin embargo, un cambio político en el municipio llevó a la inestabilidad en relación con el pago de los servicios y sobre la continuidad del contrato. Esto a su vez afectó a los miembros de la cooperativa, la reducción de su número. Una forma de superar la dependencia de la municipalidad fue establecer contactos directos con las organizaciones comunitarias, escuelas, tiendas y otras organizaciones. Además del contrato de la cooperativa depende de la comercialización de los materiales reciclables.

Sin embargo uno de los principales retos es la inserción en el mercado capitalista, donde las cooperativas se enfrentan a la competencia de las grandes empresas capitalistas, mucho mejor equipadas. Según Gonçalves-Dias (2009) las cooperativas de recolectores de residuos tienen condiciones limitadas para establecer las reglas del juego y la necesidad de ajustarse a los intereses y exigencias técnicas de las grandes empresas que compran los materiales. La falta de capital para invertir en equipos y reformas es uno de los principales cuellos de botella. Según Alexandre Camboim, coordinador del COOTRACAR, otro reto es combinar la prestación de servicios a las normas de alta calidad con una gestión democrática cultivar relaciones basadas en la cooperación y la solidaridad. El caso pone de manifiesto la vulnerabilidad de los sistemas integrados de gestión de residuos sólidos y refuerza la importancia de la acción colectiva y de las políticas públicas comprometidas con la transformación a nivel nacional, estatal y municipal para garantizar la sostenibilidad de las organizaciones de la ESS.

Conclusión

Las experiencias ESS en la gestión integral de residuos sólidos demuestran la importancia de la acción colectiva y las coaliciones entre los grupos comunitarios, movimientos sociales y organizaciones no gubernamentales. La sostenibilidad de la economía social y solidaria depende de políticas públicas

eficaces y con una red de defensa y la intervención con otras instituciones, como los movimientos sociales, grupos comunitarios y organizaciones no gubernamentales. La creciente organización de los movimientos de los recicladores y su alianza con las ONG ha logrado importantes avances a través de políticas públicas que fortalezcan la ESS. Los ejemplos de Brasil, Chile, Colombia, Sudáfrica y la India muestran que con la ayuda y el apoyo de organizaciones no gubernamentales y con el apoyo del público podría ser posible acercarse a una parte significativa de la economía popular informal para SSE. La práctica demuestra que la aplicación efectiva de las políticas públicas, la movilización y de la coalición de los movimientos sociales y las ONG deben mantenerse a nivel estatal y municipal.

La sostenibilidad de las organizaciones de la ESS no es simplemente una cuestión técnica o económica, pero, es esencialmente de carácter político, en función de las políticas públicas comprometidas con el proceso de transformación social. Cambios significativos en las políticas públicas en todos los niveles requieren una acción colectiva, para lograr el fortalecimiento de las pequeñas empresas. La falta de aplicación efectiva de las políticas y programas públicos socava la viabilidad y sostenibilidad de las organizaciones de la ESS. Además de las políticas públicas de apoyo a través de programas, proyectos y redes sociales son otros elementos esenciales para la sostenibilidad.

Ampliar

Se necesitan SSE, políticas públicas y programas de apoyo para establecer un cambio significativo en la calidad en las organizaciones de la economía informal y popular, con el fin de converger a SSE.

La última década demuestra experiencias prometedoras de gobierno compartido de los residuos sólidos entre el gobierno municipal y las cooperativas de recolectores de residuos. Las experiencias incipientes muestran el potencial para ampliar la SSE en importantes sectores económicos de la sociedad, en cuanto a la gestión de residuos sólidos. Al mismo tiempo con la responsabilidad creciente vienen crecientes desafíos como, por ejemplo, las condiciones limitadas de las organizaciones de los recolectores de materiales reciclables para establecer las reglas de los juegos, tienen que ajustarse a los intereses de las empresas privadas. Otro reto es hacia la gestión, para combinar viabilidad económica con la gestión democrática. Por lo tanto, el apoyo de los programas públicos deben orientarse también hacia el fortalecimiento de SSE para construir efectivamente la capacidad de satisfacer las demandas que surgen con las nuevas posibilidades moldeadas por las políticas públicas.